

Block 73 Villa Olímpica: Una comunidad activa por el derecho a la vivienda, la seguridad y el patrimonio

El block 73 de la emblemática Villa Olímpica ha sido tomado por un grupo de 25 familias, arrendatarias y allegadas del barrio, agrupadas en el Comité de Vivienda Villa Olímpica, desde el 21 de diciembre pasado. Esta acción es la respuesta de la comunidad organizada que ha perdido la paciencia, después de múltiples gestiones que vienen desde el año 2013, ante la poca respuesta y la desidia de las autoridades por solucionar un problema que desde el terremoto de 2010 afecta a ese barrio.

Vale destacar que después de ese terremoto, fue la comunidad de la Villa Olímpica la que se movilizó para recuperar blocks dañados, haciendo gestiones, movilizando vecinos, logrando involucrar diversos actores y profesionales, con importantes cuotas de voluntariado, para salvar esas construcciones de la demolición, de la voracidad de inmobiliarias y que el Consejo de Monumentos Nacionales la declarara Zona Típica.

Esta protección fue para poner en valor el que Villa Olímpica es el primer conjunto habitacional de grandes dimensiones y con un programa complejo y completo de arquitectura moderna en Chile, además de relevar su historia.

Después de la catástrofe y por los daños que sufrió en el sismo, la FACH, en ese entonces propietaria del Block 73, lo dejó abandonado. Y el edificio quedó allí juntando escombros, basura, ratones y transformándose en un foco de inseguridad.

Después del terremoto, ni la FACH ni las autoridades mostraron interés alguno en hacer algo con el Block 73 hasta que, en 2013, un grupo de familias del barrio vio en él la oportunidad de solucionar dos problemas: recuperar una ruina en una Zona Típica que perjudicaba al barrio y encontrar solución habitacional. Decidieron constituirse como comité de vivienda y dar la lucha por acceder a él mediante postulación colectiva a subsidio habitacional. Es decir, decidieron seguir las vías legales paso a paso.

Comenzó así un largo proceso de reuniones con autoridades y difusión en la opinión pública que tuvo como primer gran triunfo el conseguir que, el 2016, la FACH devolviera el edificio al fisco y desistiera de la venta que ofrecía el inmueble en \$480 millones.

Compromiso del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Bienes Nacionales

En octubre de 2016, en la sede vecinal de Villa Olímpica, tuvo lugar una ceremonia a la que asistieron la en ese entonces Ministra de Vivienda, Paulina Saball, el Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, el director de Serviu, Alberto Pizarro, entre otras autoridades. En la ocasión, el Comité de Vivienda Villa Olímpica fue el invitado de honor, pues en la ceremonia las autoridades explicitaron que el edificio era para el proyecto habitacional de esa organización.

Este compromiso fue formalizado en oficios que la Dirección de Serviu Metropolitano emitió a nombre de la presidenta del Comité. Además, y como parte del proceso de adjudicación de los departamentos a las familias del Comité, dicho organismo licitó y financió un estudio de evaluación estructural y de reparación del edificio para dejarlo habitable.

En paralelo, las familias del Comité ponían sus papeles en regla para cumplir los requisitos de postulación a subsidio habitacional en modalidad colectiva.

Cambio de Gobierno: Cristián Monckeberg se desentiende de los compromisos

Pero los procesos burocráticos son lentos y llegó el cambio de Gobierno en medio de este proceso. La nueva administración se mostró reticente desde un inicio a continuar con el proyecto, poniendo una serie de obstáculos que buscaron ser subsanados por parte del Comité, que se reunió con el actual Ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, para plantearle la necesidad de que él manifestara su voluntad política buscando los mecanismos legales y financieros necesarios para completar el camino ya iniciado.

Hasta ahora, las familias no han tenido la respuesta del compromiso del Ministro y, en cambio, han recibido informaciones distorsionadas y erróneas por parte de Serviu, que insiste en que el proyecto es inviable. Las razones que ha dado Serviu son por un lado que la reparación es muy costosa, que las familias del Comité no son vulnerables y recientemente han encontrado en el decreto de traspaso del inmueble a Serviu una cláusula que según ellos restringe el uso que se le de sólo a aquellas familias inscritas en el registro de damnificados del terremoto. Esto último es un ejemplo de lo que popularmente se conoce como “buscarle la quinta pata al gato”.

Respecto al tema de la vulnerabilidad, Serviu claramente maneja información falsa, ya sea por inoperancia de sus propios funcionarios o con la intención de minar el avance del proyecto. Respecto a su costo, de acuerdo a un estudio de evaluación estructural que el propio Serviu licitó y financió en 2017, éste no supera el valor de los otros edificios ya reparados después del terremoto y el Comité exige de parte del Ministro la misma voluntad política que hubo para inyectar fondos frescos, en caso de que sea necesario.

Dicho sea de paso, estas razones han sido dadas sólo de manera verbal en reuniones, sin ningún documento de respaldo. Por ello el 20 de diciembre el Comité ingresó un oficio dirigido al subdirector de Vivienda y Equipamiento del Serviu, Pablo Silva, pidiendo respaldo de los dichos de este funcionario en la última reunión sostenida con el Comité.

Reacción de la comunidad frente a las contradicciones del Ministerio de Vivienda

En este escenario, y después de 6 años con la esperanza de lograr una solución, esperanza que fue alimentada por diversas autoridades, la comunidad ha decidido tomar en sus manos lo que el Estado insiste en negarle, es decir soluciones que son parte de su función, de sus deberes. La estrechez de miras, la ambigüedad y desidia de los funcionarios ministeriales – que no se hacen cargo de sus responsabilidades en este largo proceso- está siendo contestada por una acción de presión: el block 73 debiera pertenecer a la comunidad de Ñuñoa (en sintonía, además, a las propias políticas de integración del Gobierno y del Ministerio) y si el Serviu se niega a hacerse cargo de su recuperación, la propia comunidad está dispuesta a hacerlo.

En una mirada más general, no es casual que el Serviu esté tratando de echar por tierra un proyecto habitacional que responde a la lógica de la postulación colectiva. Quiere inaugurar

la era de los proyectos de integración con fuerte inversión -y ganancia- para las inmobiliarias privadas y también de los subsidios de arriendo, un pobre premio de consuelo ante la inexistencia de la vivienda como un derecho social.

Crédito político y articulación territorial

Por otra parte, un Comité pequeño de sólo 25 familias ¿Cuánto crédito político representa para las coaliciones electorales que se disputan el Estado? Muy poco, claro. Sin embargo, a escala humana, a escala de un barrio y su comunidad, recuperar el block 73 para allegados de Villa Olímpica tiene un sentido claro y profundo.

Para ellos significa no sólo acceder a vivienda en forma digna, es obtener frutos y reconocimiento después de 6 años de trabajo, trámites y ahorro motivados a partir de una solución que surgió de ellos, que pone en valor Patrimonio Moderno y soluciona un problema de seguridad.

De fondo, está la defensa del derecho a la vivienda y en eso el Comité no está solo y las familias del Comité no somos las únicas en lucha, existe en el barrio otro comité de vivienda que demanda un terreno ubicado en calle San Eugenio y de esta articulación ha surgido la Coordinadora de Pobladores Newen.

Con la claridad que da saberse en lo justo, estas 25 familias se atrevieron a tomarse el edificio como una medida extrema frente a la desidia y la ambigüedad del Ministerio. Y allí se van a quedar. ¿Seguirán negociando con el SERVIU? Por supuesto que sí, porque saben que es al Estado a quien le cabe la responsabilidad de hacerse cargo de ello, porque es a éste a quien le corresponde velar este tema y por el bienestar general.

Lo que están haciendo a través de esta toma –que busca que el Ministerio esté dispuesto a concretar y no a dilatar y diluir un proceso de 6 años- es mostrar, como otros movimientos en lucha por vivienda ya lo han hecho antes, que el marco jurídico actual es pobre, no da el ancho para atender a las necesidades sociales, que focalizar los -demasiado escasos- recursos estatales destinados a vivienda sólo en los sectores vulnerables equivale a tratar de tapar el sol con un dedo, que se debe dar espacio al aporte de los grupos organizados y que se pueden potenciar de manera positiva necesidades de vivienda, seguridad ciudadana y de puesta en valor del Patrimonio. Que las políticas requieren ser más flexibles, acomodarse a las necesidades y circunstancias locales viendo en ellas oportunidades, y tener como foco el bienestar y calidad de vida de las personas.

Hoy, en todo Chile, gran parte de las familias trabajadoras que no logran acreditar suficiente pobreza sólo puede acceder a la casa propia a través de la banca privada y sus créditos usurarios amparados por la ley. Hace falta más que un nuevo giro neoliberal en la política de vivienda administrada por los gobiernos, hace falta que, como sociedad, digamos basta a la “dictadura” del empresariado en el ámbito inmobiliario.

Beatriz Cifuentes

Comité de Vivienda Villa Olímpica 1